



El Sagrado Corazón pide a las familias que paguen 2.293 euros ante el fin de las ayudas

AMANDA SALAZAR

✉ asalazar@diariosur.com

La falta de acuerdo entre la Diputación y la Junta pone contra las cuerdas al sanatorio psiquiátrico, que no puede asumir el coste mensual por paciente

MÁLAGA. Continúa la guerra abierta entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a propósito de las 23 plazas para personas con discapacidad gravemente afectadas en los centros Aspromanis y Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. El corte de las ayudas públicas ha puesto a estas dos entidades contra la espada y la pared hasta el punto de que el sanatorio psiquiátrico del Sagrado Corazón se ha visto obligado a pedir a las familias de los 7 pacientes en esta situación que abonen los costes de la atención. Así lo confirma Juan Manuel García, gerente de esta residencia sin ánimo de lucro, quien explica que la Diputación les notificó que no abonaría el dinero a partir del 1 de enero.

«Hemos hecho un requerimiento a las familias advirtiéndoles que, si Diputación y Junta no llegan a un acuerdo sobre quién debe pagar, tendrán que firmar un contrato privado porque no podemos seguir haciendo frente a este servicio de forma gratuita», señala García, quien lamenta la situación porque «las familias lo están pasando muy mal». «No se trata de personas dependientes sin más; nuestros pacientes tienen graves trastornos mentales asociados a su discapacidad intelectual y no pueden ser atendidos en sus casas», dice. El coste de estos puestos asciende a los 2.293 euros al mes.

Según confirmó la Diputación de Málaga a este periódico, el ente supramunicipal finalizó el 31 de diciembre el convenio con estas dos entidades «porque no es nuestra competencia», según explica la diputada de Bienestar Social, Ana Carmen Mata.



Los afectados por este conflicto entre las administraciones son discapacitados gravemente afectados. :: SUR

LAS FRASES

Daniel Pérez
Delegado de Bienestar Social

«Es en estos momentos cuando debemos hacer esfuerzos por mantener las prestaciones sociales»

Ana Carmen Mata
Diputada de Bienestar Social

«No podemos abonar los pagos de una competencia que no nos corresponde y que debe asumir la Junta»

Francisco Gutiérrez
Defensor del Ciudadano

«Ante el bloqueo de las negociaciones, hemos elevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz»

«Desde la Intervención no nos permiten abonar algo que no nos corresponde», dice Mata, quien no obstante señala que la Diputación cuenta con la cuantía correspondiente para abonar parte del año 2012 si la Junta necesita más tiempo, pero que necesita un documento de la Delegación que garantice un calendario para hacerse cargo de los puestos.

Demora de la Junta

«En el año 2011 ya pedimos a la Junta que asumiese estas plazas que deben estar dentro de la Ley de Dependencia, y nos pidió un tiempo para ir incorporándolas paulatinamente; en 2012, debido a la paralización de la Ley en Andalucía, solo se han hecho cargo de dos casos», continúa Mata.

La Delegación de Salud y Bienestar Social, por su parte, arremete contra la Diputación por dar por finalizado el convenio de forma unilateral tras 28 años atendiendo a estos centros y señala que la responsabilidad de que la Junta no pueda asumir estas plazas dentro de la Ley

de Dependencia se debe al recorte de las partidas para tal fin realizada por el Gobierno central. «Es en estos momentos cuando los responsables de las administraciones debemos hacer esfuerzos por mantener las prestaciones sociales en lugar de utilizar la crisis como coartada», dice Daniel Pérez, delegado del ramo en Málaga.

El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, ha intentado mediar en este asunto para tratar de garantizar la cobertura pública a las familias. Sin embargo, ante el estancamiento de las negociaciones ha elevado el problema al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo para solicitar una solución a la gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta. Desde Aspromanis, por su parte, el presidente Alfonso Rubio señala que las 16 personas que se encuentran en esta situación seguirán estando atendidas desde la entidad, aunque destaca la incertidumbre que están viendo las familias.